

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**



**SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

DEMANDANTE	Oscar David Cañas Saldarriaga
DEMANDADAS	<b>i)</b> Asocomunal Barbosa <b>ii)</b> Concesión Aburrá Norte S.A.S. con sigla Hatovial S.A.S. <b>iii)</b> Consorcio Grupo Ejecutor Hatovial-Gehatovial. <b>iv)</b> Gobernación de Antioquia
RADICADO UNICO NACIONAL	05001 31 05 011 2018 00195 01
TIPO DE PROCESO	Ordinario
DECISIÓN	Confirma
ACTA DE DECISIÓN	058 de 2021

Medellín, catorce (14) de abril de dos mil veintiuno (2021).

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez, quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, proceden en esta oportunidad a resolver la apelación interpuesta por el apoderado de la parte demandante contra el auto del 25 de noviembre de 2019 que rechazó la demanda.

A continuación, se toma la decisión correspondiente, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

## ANTECEDENTES

Mediante apoderada judicial, el señor OSCAR CAÑAS SALDARRIAGA presentó acción judicial en contra de:

- i) Asocomunal Barbosa
- ii) Concesión Aburrá Norte S.A.S. con sigla Hatovial S.A.S.
- iii) Consorcio Grupo Ejecutor Hatovial-Gehatovial.
- iv) Gobernación de Antioquia

Mediante auto del 19 de septiembre de 2019<sup>1</sup>, se devolvió la demanda para que en el término de 5 días se especificara “qué personas naturales o jurídicas conforman la sociedad CONSORCIO GRUPO EJECUTOR HATOVIAL-GEHATOVIAL y dirigir la demanda contra todas ellas”.

En escrito del 30 de septiembre de 2019<sup>2</sup>, la parte accionante informó que dicho consorcio, por su naturaleza, no es persona jurídica autónoma y no se registra en Cámara de Comercio, por lo que no puede allegar al Despacho las empresas que lo conforman, en tanto está constituido por acta privada que debe conservar el referido consorcio. Solicitó dar aplicación al artículo 85 del CGP al no ser posible informar al Despacho las personas jurídicas o naturales que lo conforman, peticionando además que:

“al momento de la contestación de la demanda, se requiera al CONSORCIO GRUPO EJECUTOR HATOVIAL-GEHATOVIAL para que aporte el Acta de la constitución del consorcio o el documento legal que contenga la información de las empresas que lo conforman, lo anterior para a fin de llevar a cabo los respectivos trámites judiciales. (Artículo (sic) 31 numeral 3 y 4 Código Procesal del Trabajo y la seguridad social).

De igual forma, solicito al Despacho que se vincule a todas una de empresas (sic) que se encuentren en la respectiva acta de constitución del CONSORCIO GRUPO EJECUTOR HATOVIAL-GEHATOVIAL ya que esta recurrente insiste en que no le es posible allegar el certificado de existencia y representación legal puesto que es por su naturaleza que no se registra la constitución ni los que lo conforman.

---

<sup>1</sup> Fl. 425

<sup>2</sup> Fl. 426

Los datos para notificar al CONSORCIO se encuentran en el respectivo expediente objeto de este proceso”.

Con ese memorial adjuntó constancia del 30 de septiembre de 2019, de haber remitido correo electrónico a dora.rojas@hatovial.com solicitando “me sea informadas las empresas que constituyen el CONSORCIO GRUPO EJECUTOR GEHATOVIAL y si actualmente éste se encuentra vigente”.

En auto del 25 de noviembre de 2019<sup>3</sup> se rechazó la demanda, porque conforme al artículo 28 del CPT y de la S.S., la parte demandante no colmó los requisitos exigidos en auto anterior.

Inconforme con dicha decisión, la parte accionante presentó recurso de reposición y en subsidio apelación, argumentando que no se tuvo en cuenta que “subsane los requisitos exigidos por el juzgado, aunado a lo anterior, no se indica expresamente en el auto porque (sic) razón considera que no logré subsanar los mismos, lo cual violenta mi derecho de defensa y contradicción, en tal virtud solicito al despacho que argumente su decisión”.

En auto del 5 de febrero de 2020<sup>4</sup>, el A quo indicó que, como bien lo dijo la apoderada, el CONSORCIO GRUPO EJECUTOR GEHATOVIAL, no es persona jurídica y al no proporcionar el nombre o razón social de quienes lo conforman “no se podría admitir la presente demanda por no ser esta impetrada contra una persona jurídica o natural, razón que llevo al rechazo la (sic) demanda”.

No repuso el auto y concedió el recurso de apelación.

## **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

La apoderada de la parte accionante presentó alegatos de conclusión reiterando lo argumentado en primera instancia. Se refirió a la definición de consorcio como un convenio de asociación que permite a sus integrantes organizarse de forma mancomunada para la celebración y ejecución de un contrato, asumiendo cierto nivel

---

<sup>3</sup> Fl. 428

<sup>4</sup> Fl.430

de responsabilidad solidaria entre sus miembros en el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Indicando que esa es la razón por la cual acciona contra todas aquellas personas que conformaron el consorcio para el cual prestó sus servicios el demandante, para garantizar el pago de una eventual sentencia condenatoria a favor este, sin dilaciones en cuanto a la responsabilidad de las personas jurídicas que conformaron el consorcio.

Allegó nuevamente la constancia de envío de correo al email [dora.rojas@hatovial.com](mailto:dora.rojas@hatovial.com) del 30 de septiembre del año 2019. Solicitó que, por efectos de celeridad y economía procesal, se acojan sus argumentos, se tenga en cuenta el email y se revoque la decisión de instancia, ordenándose la admisión de la presente acción y se continúe con el desarrollo normal del proceso, en procura de proteger los derechos sociales y fundamentales de su poderdante.

### **PROBLEMA JURÍDICO**

Consiste en determinar si la decisión de rechazar la demanda se encuentra ajustada a derecho. Para ello se examinará, si el Consorcio Grupo Ejecutor Hatovial-Gehatovial, goza de capacidad para ser parte en el presente proceso, a qué parte corresponde la carga de identificar integrantes de consocios para una acción judicial, y si resulta procedente dar aplicación al artículo 85 del CGP, conforme a lo solicitado por la recurrente.

### **CONSIDERACIONES**

El análisis versará sobre lo que fue objeto de recurso conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 712 de 2001 que alude al principio de la consonancia, en virtud del cual la actividad de la segunda instancia se restringe a los puntos concretos de inconformidad.

Toda vez que la demanda fue presentada contra el Consorcio Grupo Ejecutor Hatovial-Gehatovial, lo primero que debe indicarse es que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha definido desde vieja data, que para proferir una sentencia de

fondo deben estar reunidos los presupuestos procesales<sup>5</sup>, esto es, las condiciones necesarias para que el juez pueda proferir sentencia favorable o desfavorable frente a una pretensión.

Entre tales presupuestos esta la capacidad para ser parte, que consiste en la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones, y asegura que la sentencia se dicte frente a sujetos de derecho. Además es correlativa a la capacidad de goce o sustancial que tiene toda persona, sea natural o jurídica, por el sólo hecho de serlo para ser sujeto de una relación procesal, conforme a lo indicado por la H. C.S.J.<sup>6</sup>. Dicho presupuesto debe concurrir al momento de iniciar las etapas sustanciales del proceso, pues de faltar, este pierde su aptitud como instrumento para proferir sentencia de mérito.

Ahora, según el artículo 53 del C.G.P., aplicable por analogía al procedimiento laboral en virtud del artículo 145 del CPT y de la S.S., podrán ser parte en un proceso las personas naturales y jurídicas, los patrimonios autónomos, el concebido, para la defensa de sus derechos y los demás que determine la ley. Acorde a dicha norma, es dable que quien carezca de personalidad jurídica pueda tener capacidad para ser parte, siempre y cuando la ley lo autorice.

En este punto resulta relevante aludir a la jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado desde el año 2013<sup>7</sup>, donde ha estimado que así los consorcios y uniones temporales carezcan de personalidad jurídica, por cuanto no son personas jurídicas distintas de sus integrantes, no es suficiente para restarles capacidad para ser sujetos activos o pasivos en un proceso judicial. Ello en tanto los artículos 6 y 7 de la Ley 80 de 1993 los dotó de la capacidad jurídica necesaria para celebrar contratos estatales y comparecer en juicio, cuando se debatan asuntos relacionados con los mismos, por lo que no existe el vacío que se observa en los códigos civil y comercial.

---

<sup>5</sup> Corte Suprema de Justicia, Cas. Feb. 21 de 1966, G.J., t. CXV, pág. 129

<sup>6</sup> Sentencia del 8 de agosto de 2001 Sala de Casación Civil CSJ. rad.5814, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

<sup>7</sup> Sentencia de unificación jurisprudencial – consorcios, del 25 de septiembre de 2013, Radicación número: 25000-23-26-000-1997-03930-01(19933), Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Sala Plena, Consejero Ponente Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección C, Sentencia del 9 de abril de 2015, radicado 25000-23-26-0001997-15087-01 (32.427)

Para dicha corporación resulta natural que su representante sea quien deba representarlos, también en las actuaciones judiciales que se despliegue para reclamar o defender en el juicio derechos derivados de la propuesta o el contrato. Pese a lo anterior, precisó en la sentencia de “unificación jurisprudencial – consorcios” de 2013 que:

“la tesis expuesta sólo está llamada a operar en cuanto corresponda a los litigios derivados de los contratos estatales o sus correspondientes procedimientos de selección, puesto que la capacidad jurídica que la Ley 80 otorgó a los consorcios y a las uniones temporales se limitó a la celebración de esa clase de contratos y la consiguiente participación en la respectiva selección de los contratistas particulares, sin que, por tanto, la aludida capacidad contractual y sus efectos puedan extenderse a otros campos diferentes, como los relativos a las relaciones jurídicas que, de manera colectiva o individual, pretendan establecer los integrantes de esas agrupaciones con terceros, ajenos al respectivo contrato estatal, independientemente de que tales vínculos pudieren tener como propósito el desarrollo de actividades encaminadas al cumplimiento, total o parcial, del correspondiente contrato estatal.”

Por su parte, sobre la capacidad jurídico procesal de los consorcios y de las uniones temporales, ha establecido la Corte Suprema de Justicia<sup>8</sup> que no son personas, sino que se trata de entes que las agrupan con los fines de adjudicación, celebración y ejecución de un contrato estatal, y que, por tanto, son sus integrantes los llamados a responder solidariamente de todas las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

Incluso, la Sala de Casación Laboral de la H. C.S.J. en providencia AL858-2017, Radicación n.º 76623 del 15 de febrero de 2017, en la que resolvió un conflicto de competencia, indicó:

“Ahora, si la Sala entendiera que la promotora del litigio hace referencia es al domicilio del demandado, se tiene que por tratarse de un consorcio este carece de personería jurídica y, en esa medida quienes tienen capacidad para ser parte son las personas naturales o jurídicas que lo conforman, en este caso, Bureau Veritas Colombia Ltda. y Tecnicontrol S.A.S., las cuales tienen su domicilio en Medellín y Bogotá, respectivamente, de conformidad con los certificados de existencia y representación legal obrantes a folios 12 a 18.

De ahí que si los integrantes de un consorcio deben comparecer al proceso, lo harán de manera individual, en condición de demandantes o demandados, según corresponda.

---

<sup>8</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 2002-27101, 2006

...

Bajo estos parámetros, es palmaria la equivocación del Juzgado Veinte Laboral de Medellín, pues al no tener certeza del último lugar donde la actora prestó el servicio ni tampoco tener en cuenta que esta instauró la demanda contra un consorcio y no contra las personas jurídicas que lo integran, lo procedente -de conformidad con lo establecido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social-, era inadmitir la demanda con el fin de que dicha falencia fuera subsanada y de esta forma prever futuras nulidades o suscitar conflictos de competencias”

En el presente caso es claro que se demandó a quien no goza de capacidad para ser parte en este proceso con el fin de debatir la existencia del contrato de trabajo alegado por la parte actora, pues la demanda fue dirigida contra el Consorcio Grupo Ejecutor Hatovial-Gehatovial, y no contra sus integrantes de manera individual, cuya presencia de todos o algunos de ellos, se hace imprescindible para derivar e imponer las eventuales obligaciones laborales a su cargo.

Y si bien la jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que los consorcios y las uniones temporales cuentan con capacidad jurídico procesal autónoma para ser parte y comparecer a los procesos judiciales, en donde entren en juego intereses jurídicos que le sean propios, dicha línea jurisprudencial no es aplicable en este asunto, pues según esa corporación, la capacidad se encuentra sometida a los conflictos que se originen en los contratos estatales, caso que no es el que nos ocupa, pues lo acá alegado es la existencia de una relación laboral.

Aunado a lo anterior, el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, tiene establecido que los consorcios y las uniones temporales no cuentan con capacidad para obrar en los diferentes procesos judiciales, dada la falta de personalidad jurídica, por lo que, quienes en realidad tienen capacidad procesal son las personas que integran dichas asociaciones, las cuales pueden acudir a los procesos de manera individual, lo que acá no acontece, pues ni siquiera fueron mencionadas en la demanda.

Establecido lo anterior, considera esta Sala que la decisión que se revisa en apelación se encuentra ajustada a derecho, dado que si bien indica la recurrente que desconoce

quiénes conforman el consorcio, y solicitó la aplicación del artículo 85 del C.G.P., así como la vinculación de todas las empresas que lo constituyan, se evidencia que no allegó con la demanda prueba alguna que demuestre que trató de indagar por las partes que conformaban el referido consorcio.

Indica el artículo citado:

**“PRUEBA DE LA EXISTENCIA, REPRESENTACIÓN LEGAL O CALIDAD EN QUE ACTÚAN LAS PARTES.** La prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas de derecho privado solo podrá exigirse cuando dicha información no conste en las bases de datos de las entidades públicas y privadas que tengan a su cargo el deber de certificarla. Cuando la información esté disponible por este medio, no será necesario certificado alguno.

En los demás casos, con la demanda se deberá aportar la prueba de la existencia y representación legal del demandante y del demandado, de su constitución y administración, cuando se trate de patrimonios autónomos, o de la calidad de heredero, cónyuge, compañero permanente, curador de bienes, albacea o administrador de comunidad o de patrimonio autónomo en la que intervendrán dentro del proceso.

Cuando en la demanda se exprese que no es posible acreditar las anteriores circunstancias, se procederá así:

1. Si se indica la oficina donde puede hallarse la prueba, el juez ordenará librarle oficio para que certifique la información y, de ser necesario, remita copia de los correspondientes documentos a costa del demandante en el término de cinco (5) días. Una vez se obtenga respuesta, se resolverá sobre la admisión de la demanda.

El juez se abstendrá de librar el mencionado oficio cuando el demandante podía obtener el documento directamente o por medio de derecho de petición, a menos que se acredite haber ejercido este sin que la solicitud se hubiese atendido.

2. Cuando se conozca el nombre del representante legal del demandado, el juez le ordenará a este, con las previsiones del inciso siguiente, que al contestar la demanda allegue las pruebas respectivas. Si no lo hiciere o guardare silencio, se continuará con el proceso. Si no tiene la representación, pero sabe quién es el verdadero representante, deberá informarlo al juez. También deberá informar sobre la inexistencia de la persona jurídica convocada si se le ha requerido como representante de ella.

El incumplimiento de cualquiera de los deberes señalados en el inciso anterior hará incurrir a la persona requerida en multa de diez (10) a veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes (smlmv) y en responsabilidad por los perjuicios que con su silencio cause al demandante.



Cuando la persona requerida afirme que no tiene la representación ni conoce quién la tenga, el juez requerirá al demandante para que en el término de cinco (5) días señale quién la tiene, so pena de rechazo de la demanda.

3. Cuando en el proceso no se demuestre la existencia de la persona jurídica o del patrimonio autónomo demandado, se pondrá fin a la actuación.

4. Cuando se ignore quién es el representante del demandado se procederá a su emplazamiento en la forma señalada en este código.

En este caso nada se dijo en la demanda sobre la prueba de la existencia y representación de las personas jurídicas. A demás, es clara la norma al indicar que el “juez se abstendrá de librar el mencionado oficio cuando el demandante podía obtener el documento directamente o por medio de derecho de petición, a menos que se acredite haber ejercido este sin que la solicitud se hubiese atendido.”

No obstante que en el sub judice se acreditó que mediante correo dirigido a [dora.rojas@hatovial.com](mailto:dora.rojas@hatovial.com) petitionó la recurrente, con destino al CONSORCIO, se le informaran las empresas que constituyen el CONSORCIO GRUPO EJECUTOR GEHATOVIAL y si actualmente éste se encontraba vigente, este mensaje electrónico tan solo fue remitido el 30 de septiembre del año 2019, día en que se presentó el memorial con el que se pretendió subsanar el requisito exigido a la demanda, gestión que debió realizarse previo a la presentación de la demanda y allegarse prueba sumaria de haber intentado obtener tal información con un resultado negativo.

En igual sentido, la parte actora tenía la facultad de haber petitionado la información en comentó, esto es de los integrantes del consorcio, a la entidad pública responsable de la respectiva contratación, previendo la eventualidad de falta de respuesta del ente privado, pero no como se indicó anteriormente dejar dicha carga al Juez.

Es importante precisar que el artículo 12 de la ley 712 de 2001, que modificó el artículo 25 del Código del Trabajo y la Seguridad Social, establece como requisito de la demanda, en su numeral 2. “El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas”, exigencia esta como es apenas

comprensible, su cumplimiento, es carga de la parte y no puede ser suplida por la judicatura.

Así las cosas, encuentra la Sala que la recurrente no cumplió con los requisitos de la demanda exigidos en el auto del 19 de septiembre de 2019<sup>9</sup>, y tampoco resulta aplicable el artículo 85 del CGP, por lo que el auto del 25 de noviembre de 2019<sup>10</sup> mediante el cual se rechazó la demanda se encuentra ajustado a derecho.

Conforme a las consideraciones anteriores, se CONFIRMARÁ la decisión recurrida.

Sin costas en esta instancia a cargo de la parte demandante, pues a pesar de resultar vencida con la formulación del recurso de apelación, ante falta de integración de esta litis con la parte accionada, no se generó costa alguna, lo que incluye las agencias en derecho.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín**

### **RESUELVE**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la decisión del 25 de noviembre de 2019 que rechazó la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia conforme a lo expuesto en la parte motiva.

Lo resuelto se notifica por **ESTADOS**. Se ordena incorporar este auto al expediente y regresar el proceso al Juzgado de origen.

---

<sup>9</sup> Fl. 425

<sup>10</sup> Fl. 428

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

**EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL  
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA  
LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados  
N ° 62 del 15 de Abril de 2021

**consultable aquí:**

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

**Firmado Por:**

**JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE  
MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE  
MEDELLIN-ANTIOQUIA**

**FRANCISCO ARANGO TORRES  
MAGISTRADO**

**MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE  
MEDELLIN-ANTIOQUIA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme  
a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**9e591df475363a3a0004486cf527972f058136be52251d3b4732fbc09e8ef6bb**

Documento generado en 14/04/2021 02:51:43 PM